

**ACTA N°1118 - SESIÓN ORDINARIA 5/2026** - En la ciudad de Montevideo, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil veintiséis, en su sede de la calle Rincón 528, piso 8, se reúne en sesión ordinaria el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública, con la participación de la Presidenta Dra. Ana Ferraris, el Vicepresidente Cr. Alfredo Asti y el Vocal Dr. Luis Calabria. Por Secretaría Leticia Nasso. Abierto el acto siendo las 14:00 horas se pasa a la consideración del orden del día.

**Asuntos fuera del orden del día**

**1-** La Presidenta informa en Sala acerca del ofrecimiento a las Dras. Valentina Vilar y Valeria Martínez para la realización del curso "Perfeccionamiento en Inteligencia Artificial y Derecho" formulado con fecha 16 de febrero próximo pasado.

**2-** Asimismo, da cuenta de la reunión realizada con OPP (Cra. María Noel Hernández) con fecha 26 de febrero a los efectos del análisis de los recursos presupuestales disponibles a los efectos de financiar las funciones de conducción previstas en el marco del proceso de diseño organizacional y reestructuración de puestos de trabajo.

**1. Consideración del Acta de la sesión anterior**

**1.1-** Se da lectura al Acta N°1117, Sesión N°4/2026 de 12 de febrero del 2026.

*Se resuelve:*

*Aprobar la referida Acta sin observaciones.*

**2. Asuntos repartidos por Asesoría Letrada**

3729

**2.1- Expediente 2023-34-1-0000127- Denuncia anónima** por presuntas actuaciones indebidas en el uso de bienes y por conflicto de interés ocurridas en la Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP de Tacuarembó [REDACTED]

*Se resuelve:*

*Archivar las presentes actuaciones, en virtud que el propio organismo, mediante informe de las diferentes reparticiones, evacuó las dudas relacionadas al objeto de la denuncia, descartándose irregularidad alguna.*

**2.2- Expediente 2023-34-1-0000071- Solicitud de acceso a la información** pública presentada por [REDACTED] en el marco de la Ley 18.381.

*Se resuelve:*

*Pase a informe de la Dra. Pámela Olivera a fin de que aporte documentación en relación al trámite dado al acceso y si se practicó la notificación de la resolución en la que se autorizó el mismo.*

**2.3- Expediente 2023-34-1-0000011- Solicitud de acceso a la información** pública formulada por [REDACTED] en base a la Ley N°18.381.

*Se resuelve:*

*Pase a informe de la Dra. Pámela Olivera a fin de que aporte documentación e información en relación al trámite dado al acceso.*

**2.4- Expediente 2025-34-1-0000220- Acuerdo Marco de Cooperación** Interinstitucional entre el MTOP y JUTEP.

*Se resuelve:*

*Aprobar el Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional entre el MTOP y la JUTEP, quedando pendiente la determinación del monto correspondiente.*

*Mantener el expediente a despacho.*

**2.5- Expediente 2023-34-1-0000047 – Solicitud de acceso a la información pública** formulada por [REDACTED] en el marco de la Ley N°18.381.

*Se resuelve:*

*Archivar las presentes actuaciones en virtud de haberse dado respuesta en plazo a la solicitud de acceso a la información formulada por [REDACTED]*

**2.6- Expediente 2023-34-1-0000217- Traslado de la demanda** en autos c/ [REDACTED] y otros-proceso laboral ordinario "IUE 2-88034/2023 cedula nro.474/2023 22. set.2023.

*Se resuelve:*

*Pase a Administración y Finanzas a fin de corroborar si la erogación correspondiente al monto liquidado, ya se hizo efectiva.*

*Cumplido, vuelva a Asesoría Letrada a sus efectos.*

**2.7- Expediente 2024-34-1-0000275- Denuncia anónima** por presuntas irregularidades en contrataciones directas en el Área de Sanidad Policial del Ministerio del Interior [REDACTED]

*Se resuelve:*

*Vuelva a Asesoría Letrada (Dra. Valeria Martínez) a efectos de librar los oficios correspondientes.*

3731

**2.8- Expediente 2023-34-1-0000274- Denuncia anónima** por presuntas irregularidades administrativas en la vicepresidencia de OSE [REDACTED]

*Se resuelve:*

*Vuelva a Asesoría Letrada (Dra. Gabriela Mendiguibel) a efectos de librar los oficios correspondientes.*

**2.9- Expediente 2023-34-1-0000275- Denuncia anónima** por presuntas irregularidades en compras y licitaciones de exdirector de UTE [REDACTED]

*Se resuelve:*

*Vuelva a Asesoría Letrada (Dra. Valentina Vilar) a efectos de corroborar si existe otro expediente vinculado a esta denuncia y determinar si el asunto de referencia amerita la intervención de la JUTEP en esta instancia.*

**3.0- Expediente 2025-34-1-0000036- Asesoramiento** solicitado por el MSP.

*Se resuelve:*

*Vuelva a Asesoría Letrada (Dra. Valentina Vilar) a efectos de librar los oficios que correspondieren y proseguir las presentes actuaciones.*

**3.1- Expediente 2026-34-1-0000001 – Solicitud de acceso a la información pública.** ID 8645. [REDACTED]

*Se resuelve:*

*1) Autorízase el acceso a la información, en referencia a la solicitud efectuada por [REDACTED] titular de la cédula de identidad número, al amparo de la Ley N.º 18.381, de 17 de octubre de 2008.*



2) *Pase a Transparencia Pasiva a efectos de notificar al interesado, debiendo entregarle copia del informe letrado con el link de acceso a la declaración digital y la declaración en formato papel glosada del folio N°23 a 28 del Expediente.*

3) *Cumplido, archívese.*

*(Resolución N°19/2026 en anexo)*

**3.2- Expediente 2022-34-1-0000087- Denuncia anónima** por presunta situación irregular de funcionario quien presta funciones en ASSE y otras entidades médicas privadas.

*Se resuelve:*

*Tomar conocimiento de lo informado.*

*Archivar las presentes actuaciones.*

**3.3- Expediente 2025-34-1-0000076 - Declaraciones juradas** complementarias que no fueron entregadas en plazo.

*Se resuelve:*

*Tomar conocimiento.*

*Archivar las presentes actuaciones.*

**3.4- Expediente 2024-34-1-0000237- Denuncia nominada** por presunto abuso moral, laboral y persecución contra la Dirección Nacional de Migración (Ministerio del Interior). [REDACTED]

*Se resuelve:*

3733

**1)** Comunicar a [REDACTED] la presente resolución, por la que la Jutep, en su calidad de órgano de control superior en materia de corrupción, ha resuelto archivar las presentes actuaciones en virtud de que se dispuso instrucción de una investigación administrativa, sin perjuicio de que, si el Ministerio informa las resultancias, las mismas puedan ser agregadas a los presentes obrados, tal como fue solicitado mediante oficio.

**2)** Cumplido, archívese.

(Resolución N°20/2026 en anexo)

### **3.Asuntos a conocimiento de los señores Directores**

**3.1- Expediente 2023-34-1-0000232- Actuación de oficio** para proceder a gestionar el respectivo procedimiento administrativo respecto a las actuaciones de la exministra de vivienda, ordenamiento territorial y medio ambiente (MVOT), Sra. Irene Moreira. Acta N°1017/2023.

*Se resuelve:*

*Dar vista de las actuaciones del expediente por el término legal.*

*Mantener el expediente a despacho.*

**3.2- Expediente 2023-34-1-0000067- Denuncia anónima** por presuntas incompatibilidades de la Sra. Ministra de Economía y Finanzas en el ejercicio de su función [REDACTED]

*Se resuelve por mayoría:*

*1) Comunicar a la Sra. Azucena Arbeleche la presente resolución, por la que la Jutep, en su calidad de órgano de control superior en materia de corrupción ha resuelto que, al haber firmado la resolución que otorgó beneficios a la empresa*

██████████ *violentó las normas de conducta debida en la función pública, no procediendo de forma correcta y mucho menos ajustada a derecho.*

2) *Cumplido, archívese.*

*(Resolución N°21/2026 en anexo)*

**Fundamento de voto a favor del Director Vicepresidente, Cr. Alfredo Asti:**

Acompaño el informe jurídico de la Asesoría Letrada del organismo y en particular sus conclusiones "...la ministra, al haber firmado la resolución que otorgó beneficios a la empresa ██████████, violentó las normas de conducta debida en la función pública, no procediendo de forma correcta y mucho menos ajustada a derecho."

**Fundamentos del voto negativo del Director Vocal, Dr. Luis Calabria**

**Sobre la ética en la función pública:**

El accionar ético en la función pública constituye un pilar de legitimidad del Estado.

Ximena Pinto Nerón, en "La integridad del Servidor público" cita al profesor Jaime Rodríguez Arana cuando define a la ética pública como la "ciencia de la actuación de los funcionarios orientados al servicio público, al servicio de los ciudadanos", e indica que "la ética de la función pública es la ciencia del servicio público".

En el mismo sentido, Delpiazzo, en "Exigencias éticas que imponen las actuales transformaciones del derecho administrativo" cita, junto a la servicialidad, "un

*segundo aspecto que hace a la perspectiva ética” y establece que “en la medida que los funcionarios públicos deben ejercer juicios éticos con frecuencia, es aconsejable que dispongan de marcos que orienten su acción y establezcan con claridad los criterios rectores de validez universal respecto al servicio al que se deben, tales como (Rodríguez Arana Muñoz, 2010, pp. 323 y ss.):*

- a) que los funcionarios no estén por encima de las leyes de la Nación y que no se permitan actividades privadas que desprestigien al propio funcionario o a la Administración;*
- b) que los funcionarios presten atención completa a su trabajo y se caractericen por su justicia e imparcialidad en la gestión de los intereses colectivos;*
- c) que los funcionarios se esfuercen siempre por demostrar a los funcionarios que actúan de acuerdo con la justicia y la ecuanimidad;*
- d) que los funcionarios no hagan uso de su empleo para beneficio privado o para ayudar indecorosamente a personas o grupos determinados;*
- e) que los funcionarios aseguren que el manejo de los recursos públicos se realiza de manera eficiente y eficaz; y*
- f) que los funcionarios se abstengan de cualquier actividad que puedan desembocar en conflictos de interés y se esfuercen por fomentar la confianza de los ciudadanos en los Poderes públicos.*

*Por otra parte, la simple enunciación de principios, prohibiciones y reglas de conducta en el desenvolvimiento de la función pública podría inducir a pensar que ella tiene un carácter meramente indicativo de lo deseable, sin valor y fuerza jurídicos.*



*Sin embargo, nada más alejado de la verdad ya que la juridización de la ética pública se viene traduciendo en reprimir la violación de las prohibiciones y el incumplimiento de los deberes éticos como faltas disciplinarias susceptibles de ser castigadas con sanciones proporcionadas a su gravedad, previa sustanciación del procedimiento disciplinario respectivo, sin perjuicio de la responsabilidad por los delitos penales que se puedan cometer” (los resaltados nos pertenecen).*

Hay, por lo dicho, una relación de la ética con la normatividad, en tanto lo reclamado debe ser un accionar -estricto e intenso, sí-, pero vinculado a una legalidad en sentido amplio, por cuanto sin ello la ética se transformaría en un instrumento de incertidumbre, más cercano al juicio moral que al control institucional.

La ética pública no puede confundirse con cláusulas de reproche abiertas, dependientes de percepciones sociales -siempre cambiantes- o de estándares indefinidos. En esos casos, lejos de fortalecer la confianza ciudadana, se genera un efecto inverso, la sensación de arbitrariedad y la erosión de la previsibilidad en el ejercicio de la función pública.

Es desde esta concepción -normativa, garantista y exigente a la vez- que debe analizarse cualquier pronunciamiento en materia ética. No para minimizar responsabilidades, sino para ubicarlas exactamente donde el Derecho las ha querido colocar.

El análisis que se desarrolla a continuación conduce a una conclusión diversa a la adoptada por la mayoría del Directorio de JUTEP.

3737

A criterio de este director la ética pública no puede convertirse en un sistema de presunciones amplias ni en una moral administrativa difusa, sino que debe operar como un régimen de responsabilidad jurídicamente identificable.

Como dijimos *ut supra*, la ética pública no se encuentra fuera del sistema jurídico ni opera al margen de sus principios vertebrales del Estado de Derecho. Aun cuando no configure un régimen sancionatorio clásico, sus efectos son lo suficientemente relevantes como para exigir la plena vigencia de los principios identitarios del Estado moderno, entendiéndose afiliado a los principios de legalidad, razonabilidad, tipicidad y responsabilidad personal.

Cuando se pierde de vista esta naturaleza normativa, la ética se desliza hacia un terreno ambiguo, donde el reproche deja de apoyarse en conductas objetivamente verificables y pasa a fundarse en apreciaciones, percepciones o expectativas. Este desplazamiento, lejos de elevar el estándar ético, lo vuelve incierto y potencialmente arbitrario.

En todo caso, para un señalamiento ético se necesita: una conducta (o su potencialidad), una intervención funcional relevante, un nexo causal y, como garantía adicional, un estándar o parámetro normativo previamente definido. Sin estos elementos, no hay reproche ético legítimo.

### **El análisis del caso:**

El corazón del cuestionamiento al accionar de la ex Ministra de Economía y Finanzas se encuentra en el precepto del artículo 31 del Código de Ética de la función pública. El mismo establece una prohibición.

Art. 31 Ley 19.823: “Queda prohibido a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentren vinculados profesional, laboral o familiarmente o mediante

cualquier otro vínculo del cual pueda derivar un conflicto entre el interés público y el privado.

La prohibición establecida en este artículo se extiende a todas las contrataciones de servicios o de obra realizadas a solicitud de una Administración comprendida en esta ley, por organismos internacionales o mediante la ejecución de proyectos por terceros.

Esta prohibición se mantendrá durante un año, luego de que el funcionario respectivo haya cesado en sus funciones”.

La prohibición exige algunas condiciones: “ejercer su función”, la “relación con actividades o entidades...” y una tercera exigencia, ese ejercicio debe generar (aun la potencialidad) de “un conflicto” de intereses. Por tanto, no se sanciona la mera existencia del vínculo, sino el ejercicio funcional “con relación” a la entidad vinculada cuando de ello pueda derivar un conflicto. La conjunción de estos elementos impide una lectura “automática” basada exclusivamente en el dato familiar. Si resultara suficiente la coincidencia entre la “posición” o el “ejercicio” con la “relación” el legislador no habría tenido necesidad de avanzar en el texto exigiendo la derivación de “un conflicto entre el interés público y el privado”.

Para concluir que hubo una falta ética debe acreditarse, al menos, una intervención funcional susceptible de incidir en la decisión administrativa, de la cual pueda derivar -aunque sea potencialmente- un conflicto entre el interés público y el privado.



Sería un error solo contemplar la posición jerárquica, desprendida del “ejercicio” de la función y del conflicto de intereses.

El concepto de “ejercer su función” no puede equipararse sin más a la mera titularidad orgánica del cargo ni a la participación formal en la suscripción de actos cuya sustancia se encuentra predeterminada por parámetros normativos y técnicos.

Por ello no se debe equiparar la existencia de un vínculo personal o familiar con la configuración de un conflicto de intereses.

La ética pública no sanciona vínculos, relaciones personales ni trayectorias vitales. Sanciona -cuando corresponde- conductas funcionales desviadas. Confundir ambos planos implica introducir, por vía interpretativa, una suerte de inhabilitación ética por entorno o cercanía, no prevista por la norma y contraria al principio de responsabilidad personal. Aceptar esta lógica conduciría a una consecuencia institucionalmente muy problemática y es que el funcionario pasaría a responder éticamente no por lo que hace en ejercicio de su función, sino por quién es o a quién conoce, aun cuando ese entorno no tenga incidencia alguna en la decisión administrativa. Esta concepción, además de carecer de sustento normativo, resulta incompatible con un sistema republicano de responsabilidades.

Intervenir - “ejercer su función” en palabras del artículo 31 mencionado- no equivale a ocupar una posición jerárquica, ni a ejercer una titularidad orgánica, y no debe interpretarse de manera puramente formal o automática. Si bien la firma de un acto administrativo constituye una manifestación del ejercicio del cargo, la prohibición debe analizarse en función de la aptitud de esa intervención para generar un conflicto entre el interés público y el privado. El



“Ejercicio” requerido por la norma supone participar de manera efectiva en la formación de la voluntad administrativa, con potencialidad objetiva de incidir en la decisión, esto es, con margen de configuración o apreciación que pudiera ser orientado hacia un interés propio, distanciado del interés público.

Pero como en el caso eso no ocurre, porque en esencia el beneficio otorgado se trata de un acto esencialmente reglado, no aplica el reproche.

El régimen de promoción de inversiones se estructura sobre procedimientos reglados, parámetros técnicos objetivos y decisiones predeterminadas por la normativa. No se trata de un ámbito de discrecionalidad ni de apreciación subjetiva. Por el contrario, el diseño normativo apunta precisamente a minimizar márgenes de decisión individual, buscando garantizar la objetividad, previsibilidad y neutralidad en la aplicación del régimen.

Esta característica tiene una consecuencia jurídica contundente. Es que allí donde no existe poder de configuración decisoria, no podría configurarse un conflicto de interés. No porque el funcionario carezca de intereses personales, sino porque carece de la posibilidad concreta de orientar la decisión pública en función de ellos. El sistema reglado neutraliza la posibilidad del conflicto.

Aun cuando la autoridad participe en el procedimiento, el diseño de los procesos no le confiere capacidad jurídica para alterar el contenido del beneficio ni para orientar la decisión hacia un interés particular, sino únicamente para validar extremos previamente determinados por parámetros ya definidos. Sin poder decisorio relevante, no hay espacio para la desviación, y sin desviación de finalidad no hay posibilidad de cuestionamiento.

3741

En cuanto al conflicto de intereses, hay que señalar que el mismo no puede definirse a partir de la mera coexistencia entre una función pública y circunstancias personales. Como resulta lógico, esa coexistencia es inherente a la condición humana y profesional de cualquier funcionario. La conducta reprochable no es “tener interés”, sino intervenir en un asunto en el que ese interés exista. Lo que se exige para que haya conflicto es una intervención funcional efectiva, esto es, la capacidad real -aún potencial- de incidir en la formación de la voluntad administrativa en un asunto concreto, orientándola eventualmente hacia un interés propio. En breve: poder incidir, lo que al caso es inaplicable por el carácter reglado del sistema.

Otro punto a señalar es la relación del “ser y parecer” al caso concreto.

El “ser y parecer” previsto por el artículo 13 del Código de Ética cumple una función relevante como pauta orientadora de la conducta pública y como recordatorio de la importancia de la confianza ciudadana en las instituciones. Ello no implica que pueda operar como sustituto de los tipos éticos específicos establecidos por el legislador.

Indudablemente supone un nivel de exigencia superior, relacionado con un “ideal” donde aparece la figura de la apariencias. Ahora bien, también esta previsión tiene también un basamento normativo. No se trata de una norma abierta, puede pecar de imprecisa, pero no llega a ser abierta. Más aún, el fundamento doctrinario de este precepto está en la tesis del “observador razonable”. Es decir, no un observador cualquiera, sino uno calificado. Es esa “razonabilidad” la que contribuye a su correcta interpretación. En el caso, al cumplirse con los requisitos exigidos por la normativa, no resultaba ni posible ni razonable un comportamiento diferente.

Por todo lo dicho, la actuación de la ex Ministra de Economía y Finanzas se desarrolló acorde a Derecho, en un marco reglado, sin poder decisorio relevante, sin beneficio personal y sin desviación funcional. Formular un reproche ético en tales condiciones no solo carece de base jurídica, sino que contribuye a desdibujar los contornos del sistema de ética pública, con el consiguiente perjuicio para la seguridad jurídica.

Finalmente, corresponde recordar que la JUTEPA actúa como órgano superior en materia ética, pero su rol no es el de crear prohibiciones nuevas, ampliar inhabilitaciones ni exigir comportamientos no previstos por el ordenamiento. Cuando el análisis ético desborda esos límites, se genera una tensión institucional que no fortalece la ética pública, sino que la debilita, al asociarla con criterios inciertos y expansivos, que pueden derivar en reproches arbitrarios y por tanto injustos.

### **3.3- Expediente 2026-34-1-0000049- Misión Oficial - Foro Global**

Anticorrupción y de Integridad (GACIF) de la OCDE en París - Francia - 23 a 27 de marzo del 2026.

Sometido el asunto a deliberación del Directorio:

#### **1) Vocal Dr. Luis Calabria:**

Me abstengo hasta tanto no exista el plan de misiones oficiales para el ejercicio 2026.

*Se resuelve por mayoría:*



*1) Aceptar la invitación cursada por La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).*

*2) Aprobar la asistencia de la Dra. Ana María Ferraris para participar en la Foro Global Anticorrupción y de Integridad (GACIF) a desarrollarse los días 23 al 27 de marzo del corriente, en la París, Francia.*

*3) Pase a Administración y Finanzas a sus efectos.*

**Constancia de abstención del Director Vocal Dr. Luis Calabria:**

El caso de las Misiones Oficiales comporta responsabilidad institucional y funcional. La normativa establece una serie de deberes para los funcionarios designados. El artículo 9 del Decreto 148/992 establece que: *“Cuando los funcionarios públicos concurren en misión oficial a conferencias, seminarios, cursos o eventos de análoga naturaleza, deberán presentar en un plazo máximo de quince días de su retorno al país un informe completo sobre las jornadas cumplidas adquiridos los trabajos presentados y los conocimientos adquiridos. Conjuntamente con el informe deberán además entregar toda la documentación o bibliografía que le fuera suministrada por la entidad organizadora.*

*Deberá remitirse copia del informe a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.*

*El incumplimiento de rendir cuentas, cuando correspondiera, dará lugar a la suspensión del pago de toda retribución económica del funcionario, a excepción de los descuentos o retenciones legales o judiciales, debiendo la Contaduría Central del inciso al que pertenece el funcionario controlar tal extremo”.*

En el caso de JUTEP, en algunas misiones encabezadas por la presidenta no se han cumplido con los plazos respectivos. Por ejemplo en la Misión “43 reunión del comité de expertos del MESICIC - 10 al 13 de marzo del 2025” tramitada en Expediente 2024-341-0000339 el informe se presentó con fecha 25 de abril de 2025; en la Misión “Conferencia de Consenso Regional Multiactor: la dimensión



preventiva en el combate a la corrupción frente a las nuevas formas de delincuencia organizada”, organizada por EL PACCTO 2.0, que se llevó a cabo el 12 de junio 2025, en la Ciudad de Brasilia, tramitada en expediente 2025-34-1-0000162, se presentó el informe en fecha 29 de diciembre de 2025; en la Misión “Fortalecimiento de la UNCAC, Conferencia plataforma regional llevada a cabo entre el 29 y 31 de julio de 2025 en Asunción, tramitado en expediente 2025-34-1-0000 171, fue informado con fecha 30 de diciembre de 2025; la Misión “Conferencia interregional “protección de recursos estratégicos en América Latina y el Caribe: lucha contra el crimen organizado, lavado de activos y la corrupción en el sector minero” realizada en Río de Janeiro entre el 15 y el 19 de setiembre de 2025, tramitada en expediente 2025-34-1-0000241, fue informado con fecha 29 de diciembre de 2025; en la Misión “Novena reunión de la Red de Integridad de América Latina y el Caribe (OCDE-BID)” desarrollada en Asunción el 11 de noviembre del 2025 tramitada en expediente 2025-34-1-0000243, fue informado con fecha 30 de diciembre de 2025 y la Misión “Segunda Conferencia Global sobre el Aprovechamiento de Datos para Mejorar la Medición de la Corrupción”, desarrollada entre los días 2 a 4 de diciembre del 2025 celebrada en Nueva York y tramitada en expediente 2025-34-10000314, fue informada con fecha 29 de diciembre. Para un correcto seguimiento de los asuntos tratados en las Misiones Oficiales se solicita a la Presidencia se cumplan los plazos establecidos por la normativa.

Del mismo modo se proceda a la rendición de gastos en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto por el artículo 46 de la ley 19.924. En el caso de la Misión

3745

“43 Reunión del comité de expertos del MESISC” tramitada en expediente 2024-34-1-0000339, la devolución definitiva del viático sobrante se produjo recién en noviembre cuando la misión ocurrió entre el 10 y 13 de marzo, existiendo además dos Declaraciones Juradas diversas sobre la misma Misión (folios 27 a 34 de expediente 2025-34-1-0000398).

**Fundamentos de la Presidenta, Dra. Ana Ferraris:**

En consideración del planteo formulado por el Director Dr. Calabria referido a las misiones oficiales de las que participé corresponde plantear algunas consideraciones.

En primer lugar, señalar que en el periodo referido en el planteo del Dr. Calabria hubo un alto cumulo de trabajo en tareas urgentes a mi cargo que requirieron atención inmediata lo que ha limitado el tiempo para la correcta sistematización de la información recogida en las distintas actividades de las que participe. A vía de ejemplo corresponde señalar todo el trabajo relativo al Presupuesto Nacional en lo que a nuestro inciso respecta.

Asimismo, cabe mencionar un conjunto importante de actividades relacionadas con el proceso de diseño organizacional de la JUTEP desde junio de 2025, la elaboración de los compromisos asumidos por el organismo en lo que refiere al 6º Plan Nacional de Gobierno Abierto entre un sinfín de actividades que por primera vez se están difundiendo en la web del organismo. A tales efectos se pude consultar en: <https://www.gub.uy/junta-transparencia-etica-publica/comunicacion/calendario-actividades/agenda-del-directorio-2025>

Cuando se ocupan cargos de alta responsabilidad, el equilibrio entre la gestión operativa y el cumplimiento administrativo (la rendición de cuentas) en ocasiones como esta suele ser extremadamente difícil de mantener.

En cuanto a la liquidación de viáticos a los que hace referencia se deja constancia que se padeció error y que una vez advertido por la suscrita se procedió a su regularización en consulta con el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas quien no formulo objeciones.

La apuesta es a trabajar juntos con el compromiso inquebrantable por una gestión más eficiente y transparente, como lo venimos haciendo desde el día que asumimos la Presidencia de la JUTEP.

#### **4. Asuntos repartidos por Administración y Finanzas**

**4.1 – Expediente 2026-34-1-0000052-** Solicitud de cambio de horario año lectivo 2026 de la funcionaria Gabriela Mendiguibel.

*Se resuelve:*

*Aprobar el cambio de horario solicitado por la Dra. Gabriela Mendiguibel.*

*Pase a Administración y Finanzas a sus efectos.*

*Cumplido, archívese.*

Las resoluciones adoptadas en la presente acta forman parte integrante de la misma. No siendo para más, se da por concluida la sesión a la hora 15:10. La presente será aprobada por los señores Directores en la próxima sesión del Directorio.

Firmado por:

Presidente Dra. Ana María Ferraris

Vicepresidente Cr. Alfredo Asti

Vocal Dr. Luis Calabria